INFORME MOTIVADO CASO No. 2431-21-EP

Dr. Franklin Paúl Altamirano Sánchez, comparezco dentro de la presente causa y en virtud de lo solicitado en la providencia dictada el 24 de enero del 2022, por la Sala de Admisión de la Corte Constitucional del Ecuador, en el cual dispone: “... que el juez de la Unidad Judicial de Familia, mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha y los jueces de la Sala Especializada de la Familia, Niñez , Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que emitieron las decisiones judiciales impugnadas, presente un informe debidamente motivado de descargo sobre los argumentos que fundamenta la demanda...”.

Con estos antecedentes se informa lo siguiente:

En la sentencia No. 17203-2021-00067 en su parte pertinente se señala lo siguiente: “...En el caso sub júdice, una vez escuchadas las exposiciones tanto de la parte accionante, como de la parte accionada, manifiesto lo siguiente: luego del análisis realizado, de la revisión de los recaudos procesales se establece que no se ha procedido a notificar a la legitimada activa con el informe motivado en el expediente administrativo MOT-0026-SNCD-2017-LR (1554-2016), la defensa Técnica del Consejo de la Judicatura y como consta en audio de las audiencias ha manifestado que: “...la notificación de informe motivado, como manifesté anteriormente, el mencionado es mera referencia. No es necesario ser notificado...”, adicionalmente se ha verificado que no consta en el proceso judicial, como tampoco el Consejo de la Judicatura ha justificado documentadamente la constancia de la notificación con el contenido del Informe Motivado dentro del expediente administrativo MOT-0026-SNCD-2017-LR (1554-2016), notificación esta que en los sumarios administrativos o procedimientos disciplinarios es obligatoria, por cuanto se debe poner en conocimiento del sumariado, los actos o las decisiones emitidos por autoridad pública y de esta forma permitir se garanticen los principios de publicidad, de contradicción, impugnación, y que la persona sumariada no quede en la indefensión, ya que al darse este escenario, se priva a la persona sumariada que conozca el contenido de dicho informe motivado, vulnerando de esta manera su derecho a la defensa y contradicción, prevista en el artículo 76 numeral 7 literal a) y h) de la Constitución de la República del Ecuador, consecuentemente no se ha justificado que el Consejo de la Judicatura procedió con la notificación del informe motivado en legal y debida forma, de esta manera se concluye que la Acción de Protección cumple con los requisitos establecidos en el Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo que **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se acepta parcialmente la acción de protección presentada por Dra. Alexandra Elizabeth Endara Muñoz en contra del CONSEJO DE LA JUDICATURA, en consecuencia: [1] Se declara vulnerado el derecho constitucional del debido proceso en la garantía de contradicción por la falta de notificación del informe motivado en el expediente administrativo MOT-0026-SNCD-2017-LR (1554- 2016), conforme lo establece el Art. 76 numeral 7 literales a) y h) de la norma constitucional; y, como MEDIDA DE REPARACIÓN se dispone: 1] Retrotraer el proceso al estado que se generó la vulneración del derecho Constitucional; esto es, al estado de notificar con el informe motivado en el expediente administrativo MOT-0026-SNCD-2017-LR (1554-2016) a la accionante a fin de garantizar su derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, el derecho a la defensa y la garantía a la contradicción para que puede ejercer su derecho en legal y debida forma...”.

Con estos antecedentes, se señala que no se justificó por parte del Consejo de la Judicatura, que se haya notificado a la legitimada activa con el informe motivado en el expediente administrativo MOT-0026-SNCD-2017-LR (1554-2016), notificación esta que en los sumarios administrativos o procedimientos disciplinarios **es obligatoria**, por cuanto se debe poner en conocimiento del sumariado los actos o las decisiones emitidos por autoridad pública y de esta forma permitir se garanticen los principios de publicidad, de contradicción, impugnación, y que la persona sumariada no quede en la indefensión, razón por la cual se determinó que se vulneraron de esta manera el derecho a la defensa y contradicción, prevista en el artículo 76 numeral 7 literal a) y h) de la Constitución de la República del Ecuador, concluyendo así que se cumple con los requisitos establecidos en el Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, aceptando parcialmente la acción de protección presentada por Dra. Alexandra Elizabeth Endara Muñoz en contra del CONSEJO DE LA JUDICATURA, se vulneró el derecho constitucional del debido proceso en la garantía de contradicción por la falta de notificación del informe motivado en el expediente administrativo MOT-0026-SNCD-2017-LR (1554-2016), conforme lo establece el Art. 76 numeral 7 literales a) y h) de la norma constitucional, de igual manera se indicó que como **MEDIDA DE REPARACIÓN** se dispone retrotraer el proceso al estado que se generó la vulneración del derecho Constitucional; esto es, al estado de notificar con el informe motivado en el expediente administrativo MOT-0026-SNCD-2017-LR (1554-2016) a la accionante a fin de garantizar su derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, el derecho a la defensa y la garantía a la contradicción para que puede ejercer su derecho en legal y debida forma

Con estos antecedentes, debo indicar que se ha cumplido con lo establecido en el los artículos 6, 17 y 18 de la Ley de Garantía Jurisdiccionales y Control Constitucional, en referencia al Contenido de la sentencia en la que constan los antecedentes, la identificación de la persona afectada y de la accionante, la identificación de la autoridad, órgano o persona natural o jurídica contra cuyos actos u omisiones se ha interpuesto la acción, los Fundamentos de hecho, la relación de los hechos probados relevantes para la resolución, los fundamentos de derecho, la argumentación jurídica que sustente la resolución y en la Resolución se ha hecho constar la declaración de violación de derechos, con determinación de las normas constitucionales violadas y del daño, y la reparación integral en la que se dejó al estado donde se produjo la violación, es decir el retrotraer el proceso al estado que se generó la vulneración del derecho Constitucional; esto es, al estado de notificar con el informe motivado en el expediente administrativo MOT-0026-SNCD-2017-LR (1554-2016) a la accionante a fin de garantizar su derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, el derecho a la defensa y la garantía a la contradicción para que puede ejercer su derecho en legal y debida forma.

Para futuras notificaciones señalo mi correo electrónico franklin.altamirano@funcionjudicial.gob.ec

Dr. Franklin Altamirano Sánchez